

Parlamento Indígena Popular
Documento Público

Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, Piendamó, Cauca

Diciembre 13 de 2007



En Cota, Cundinamarca, entre el 25 y 30 de noviembre de 2001 en reunión Nacional de los pueblos indígenas de Colombia le propusimos “...al conjunto del movimiento popular la creación de una Alianza para la Paz, para sumarnos al trabajo con otros, campesinos, negros, sindicales, raizales, mujeres, en la construcción de una propuesta alternativa de paz, abierta, de cara al país, donde tengamos el derecho de decirle a los grupos armados y al Estado lo que pensamos y queremos

en relación con la paz, y el derecho de decidir sobre el tipo de sociedad al cual aspiramos.

Tanto el XII Congreso Regional Indígena del Cauca en año 2005, realizado en Caldono y el Congreso Extraordinario de la María realizado en año el año 2007, indicaron la necesidad de una instancia que proponga e identifique normas que rectifiquen el proceder institucional nacional que afecta los derechos fundamentales e históricos de los pueblos indígenas, tomando como base el Derecho Mayor y la Ley de Origen.

Reunido el Parlamento Indígena Popular, analizó las razones que justifican las acciones de las comunidades indígenas:

1. Reiterar nuestra convicción de defensa y liberación de la madre tierra, ante la agresión de la que viene siendo víctima por parte del gobierno nacional, las multinacionales, los megaproyectos y los comerciantes nacionales e internacionales; en el sentido de apoyar las acciones que están desarrollando las comunidades por la Liberación de La Madre Tierra.
2. Exigir cumplimiento al gobierno nacional sobre los compromisos pendientes con comunidades y organizaciones indígenas del Cauca, en especial el acuerdo del Nilo y el decreto 982, así como a la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos, entre ellos el acceso integral a la tierra.
3. Reclamar del Estado Nacional agilizar las resoluciones de ampliación de los resguardos con los predios que se encuentran a nombre de Fondo Nacional Agrario, muchos de los cuales con más de 20 años.
4. Resaltar que la Madre Tierra es una propiedad colectiva integral, que incluye el suelo, subsuelo y el espacio aéreo circundante, con calidad de inembargable, imprescriptible e inajenable.
5. Demandar enmienda errores cometidos por el Incoder a nombre del Gobierno nacional, como el realizado al adquirir el predio Villa Carola con destino a población desplazada, desconociendo que su ubicación está dentro del ámbito territorial indígena de Poblazón y que existe compromiso de adquirirlo para el pueblo Kokonuko por parte del Estado colombiano desde antes de 1992.
6. Descubrir las trabas jurídicas inconstitucionales, insertas en los Planes de Ordenamiento Territorial de varios municipios del Cauca con las cuales el Estado prohíbe la venta de tierras a comunidades indígenas.
7. Evidenciar la política de expropiación impulsada por el gobierno nacional que pone

El mandato asumió temas globales de impacto para el movimiento indígena y popular tales como: Consulta Previa, Autonomía y Leyes Propias, Tratado de Libre Comercio con los EEUU, y Mandato Agrario

en duda la vigencia de los títulos coloniales, legitimando la usurpación del territorio indígena por parte de particulares como lo valida el Estatuto de Desarrollo Rural.

8. Denunciar que dichos conceptos racistas y discriminatorios fueron pasados por alto por los organismos de control del Estado y paradójicamente recogidos por los ministerios de agricultura y del Interior y de Justicia que los presentaron al Congreso nacional el cual los incluyó como norma en el proyecto de contrarreforma agraria conocido como Estatuto de Desarrollo Rural.
9. Recordar que Territorio implica Autonomía, lo cual significa que los diversos programas y proyectos que se implementen en nuestras comunidades se guiarán solo bajo los mandatos de los Congresos y Juntas Directivas Regionales de Cabildos en el Cauca.
10. Saludar la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU, denunciando que fue votada en contra por Estados Unidos y Canadá mientras que el gobierno colombiano se abstuvo argumentado que contradice la juridicidad colombiana.
11. Convocar a la población agraria y sectores sociales populares del país para que tejamos de manera conjunta la defensa territorial, rechacemos las leyes y tratados que ponen en riesgo nuestras vidas y formas culturales y continuemos unidos construyendo el país que soñamos los sectores populares.

El Parlamento también observó que la primera reacción del gobierno colombiano ante las acciones de Liberación de La Madre Tierra, fue la de activar sus fuerzas represivas e iniciar un plan mediático de desinformación a la opinión pública con el cual fomenta de forma irresponsable y mentirosa la idea que los pueblos indígenas cohonestan con los intereses de la guerrilla de las Farc. Este discurso gubernamental no difiere en nada de los argumentos utilizados por los primeros invasores de América desde hace más de 500 años, mediante el cual los diferentes poderes han justificado

históricamente los desplazamientos forzados, las masacres y los genocidios de pueblos enteros.

Los informes dan a conocer que las acciones de Liberación de La madre Tierra se están realizando en 7 municipios del Cauca y dos del Huila y que las comunidades han efectuado actos rituales en más de 15 fincas donde hacen presencia en la actualidad.

El Parlamento cuestiona la difamación continua que hace el gobierno departamental frente al proceso de los pueblos indígenas, así como el uso de procedimientos velados e intimidatorios usados por los organismos de investigación, con los cuales se crea zozobra en las comunidades, considerando repudiabiles las acciones violatorias a los derechos humanos desarrolladas por las fuerzas combinadas del ejército y la policía nacional en contra de nuestra gente, a la cual han atacado con tanques de guerra, armas de fuego, gases, papas explosivas, caucheras y granadas que contienen balines y otros artefactos, afectando a varios comuneros con lesiones permanentes, especialmente en las fincas La Emperatriz y el Japio, ubicadas en Caloto, y la Perla en el oriente caucano.

En conclusión, el Parlamento Indígena Popular, comparte las apreciaciones comunitarias que dan razón a sus acciones: La Madre Tierra está enferma, La Madre Tierra está perseguida por el Gobierno colombiano, La Madre Tierra es prisionera del capital transnacional, La Madre Tierra tiene vigilancia privada a nombre del gobierno colombiano.

En segundo lugar, el Parlamento indígena Popular considera que en las condiciones de la legalidad existente se dificultan las posibilidades para que el Estado cumpla con sus compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, porque el gobierno nacional, dada su influencia en el Congreso de la República y a su parcialidad con el capital financiero multinacional ha presionado la emisión de leyes que favorecen el monopolio de la propiedad privada, limitando y poniendo en riesgo la tenencia colectiva y comunal de la tierra.

...el Parlamento indígena Popular considera que en las condiciones de la legalidad existente se dificultan las posibilidades para que el Estado cumpla con sus compromisos adquiridos con las comunidades indígenas...

Identifica el Parlamento indígena Popular que la seguridad democrática, como política central del gobierno nacional responde a mandatos internacionales que privilegian el achicamiento del Estado y el control central de las instituciones, pero en especial favorece al capital multinacional. De ahí que la política privilegie las acciones militares y la coacción violenta frente a iniciativas de solución pacífica o negociada. Se puede sospechar que la política de seguridad democrática, más que poner fin al conflicto armado, lo usa para mantener argumentos que justifiquen la represión de las voces críticas o la exigibilidad de derechos y garantías constitucionales. Palabras como soberanía cambian para sustituirlos por los de guerra fría, presencia del demonio comunista y peligro del terrorismo, con lo cual se argumentan discursos como los del gobernador Chauz, quien vocifera que las acciones de Liberación de La Madre Tierra son impulsadas por la Jacobo Arenas cuyas filas están integradas por indígenas que defienden los laboratorios del narcotráfico.

Es claro para este parlamento que la propiedad colectiva sigue siendo un obstáculo para el actual modelo económico, ya que gran parte de las riquezas naturales y del subsuelo están en áreas indígena o afros. No es casual que Tanto Estados Unidos y Canadá, no votaran la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que Colombia se abstuviera argumentando que contradice las leyes nacionales.

Las noticias son alarmantes, pues los territorios indígenas continúan sufriendo procesos de degradación de suelos y deforestación, con la consecuente pérdida de la biodiversidad y la deforestación de áreas ancestrales debido a la presión del modelo económico que privilegia los monocultivos, entre ellos la estrategia de romper el tejido social mediante la presencia de cultivos para usos ilícitos o la entrega de vastos territorios al capital multinacional.

En este sentido entendemos que el código minero, aprobado por el actual Congreso de la Re-

pública, solo permite la minería conocida como “a cielo abierto”, práctica en la que se especializan las multinacionales. Dicha normatividad facilita la entrega de vastos territorios al capital internacional, haciendo ver que la capacidad financiera y técnica para explotar a cielo abierto nunca será superada por los mineros artesanales.

Compartimos con otros sectores sociales del país que el estatuto de desarrollo rural da al traste con la intención social de una verdadera reforma agraria, y que por el contrario busca garantizar la obtención de recursos económicos en una concepción monopólica y mercantilista, en defensa de los capitales económicos privados, en donde la ganancia se individualiza y las pérdidas se socializan, debiendo asumirlas en últimas el Estado.

Con la implementación de políticas reduccionistas, homogenizantes y globalizantes el Estado no solo desconoce las particularidades de la nación colombiana sino que impide garantizar los derechos fundamentales de los pueblos ancestrales. La política expresada en las leyes de transferencias, salud y educación son proclives a la privatización de los derechos, colocando en alto riesgo la vida y la continuidad de nuestros pueblos, pues desconoce la propiedad colectiva y los saberes ancestrales, limita, además, las obligaciones estatales con relación a los derechos fundamentales de salud y educación.

En este orden de ideas el plan de desarrollo del segundo mandato de Uribe, con su estrategia

de recuperación social del territorio es la culminación del modelo iniciado con el plan Colombia, cuyo fin es quitarle la tierra a los indígenas, a los afros y a los campesinos pobres, ya que combina la acción militar con tareas civiles, facilitando así el desplazamiento forzado para brindar garantías al comercio de la tierra y la entrega los territorios ancestrales a la explotación global, limitando y menoscabando las bases reales del Estado Social y Democrático de Derecho.

Con base en los anteriores fundamentos el Parlamento Indígena Popular, atendiendo al llamado de la madre tierra y a la convocatoria de las autoridades espirituales, así como a la memoria colectiva, al caminar de la palabra y a la acción de nuestros pueblos, hemos sesionado haciendo uso del Derecho Mayor, de la Ley de Origen y del reconocimiento a la diversidad contenido en la Constitución colombiana, y como resultado de este ejercicio presentamos a las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en el CRIC, un paquete normativo referido a desobediencia Civil, Autonomía y derechos fundamentales como Tierras, Naturaleza y medio ambiente, Salud y Educación entre otros, con el fin que sea acordado y exigido como política nacional en nuestros territorios, buscando que otras regiones y pueblos indígenas del país lo acojan para que sean una lucha conjunta y de unidad social en perspectiva de fortalecer el Estado justo que buscamos los sectores mayoritarios de Colombia■



Parlamento Indígena Popular Territorio de Convivencia Dialogo y Negociacion de la Sociedad Civil- La Maria Piendamó

Diciembre 14 de 2007



Acuerdo Humanitario

El parlamento indígena popular, al sesionar frente al tema del acuerdo humanitario manifestamos nuestra disposición a contribuir con la búsqueda de caminos que resuelvan esta problemática, considerando además que entre las personas que están en cautiverio, se encuentran también los amenazados, los perseguidos, los desplazados y los desaparecidos, situación ante la cual debe generarse una búsqueda urgente de soluciones.

En la medida que estas situaciones vayan teniendo soluciones, se contribuirá a la construcción de una paz duradera, con participación de todos los sectores. Reiteramos nuestra posición de apoyar la solución política del conflicto armado para lo cual el parlamento indígena popular reconoce, ratifica y propone para el resto de la sociedad nacional e internacional el escenario de la María como el territorio de dialogo, convivencia y negociación■

Lorenzo Largo Dagua

–Guardia Indígena–



Un muerto más para la conciencia institucional que queda bajo la responsabilidad de la política de seguridad democrática del gobierno nacional

Lorenzo Largo Dagua ha muerto hoy... fue Guardia Indígena y era originario del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, llevaba varios días en cuidados intensivos tras haber sufrido un impacto de arma de fuego disparada por el Esmad, en la vía Caloto – Corinto, el 29 de noviembre, cuando las comunidades indígenas del norte del Cauca realizaban acciones de Liberación de La Madre Tierra.

La Muerte de Lorenzo Largo Dagua, sucedida el 14 de diciembre de 2007, aumenta el número de víctimas producto de la masacre del Nilo sucedida el 15 de diciembre de 1991. Por dicha masacre el gobierno nacional firmó un Convenio el 16 de diciembre del mismo año para realizarse en tres años con el objetivo de resarcir el daño causado al pueblo nasa del norte del Cauca, compromiso que no ha sido cumplido aún y que es una de las causas por las cuales las comunidades indígenas se movilizan con frecuencia.

Para los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales la muerte de Lorenzo Largo Dagua

es responsabilidad directa del gobierno departamental y nacional. Del primero por las calumnias del gobernador Juan José Chaux, proferidas contra los pueblos indígenas, las cuales incitaron la acción violenta y desmedida del Esmad contra la comunidad movilizada, y dos, por la política de seguridad democrática del presidente Uribe que responde con acciones militares cuando se reclama cumplimiento de sus compromisos.

La Consejería Mayor CRIC llevamos condolencias a la familia de Lorenzo Largo Dagua con un mensaje de solidaridad para toda la comunidad de origen, así como para sus autoridades tradicionales en el resguardo de Tacueyó, al considerar que esta partida forzada por la infamia es una pérdida irreparable para el pueblos Nasa y para los procesos organizativos del departamento del Cauca

Lorenzo Largo Dagua: Ejemplo de Dignidad y Resistencia...

Lorenzo Largo Dagua: Semilla para la Liberación de La Madre Tierra

Lorenzo Largo Dagua: Los pueblos indígenas del Cauca, acompañaremos tu retorno al seno de la Madre Tierra

*Consejo Regional Indígena del Cauca
Popayán, diciembre 14 de 2007*

Mandato del Parlamento Indígena Popular sobre Ampliación, Constitución y Saneamiento de Resguardos y Tenencia de la Tierra.



Atendiendo al llamado de la madre tierra y a la convocatoria de las autoridades espirituales, hemos analizado, apelado a la memoria colectiva, a la palabra y a la acción, y sesionado como parlamento indígena popular.

La voz de los siglos nos habla de la sabiduría y la herencia milenaria de pueblos que existimos antes de la existencia de los Estados nacionales actuales, con reglas, comportamientos y valores que garantizaron nuestra supervivencia, y los cuales siguen siendo vigentes e imprescindibles para la prolongación del proyecto humano y la continuidad de la energía llamada vida.

El territorio que constituye nuestro hábitat ha sido la base sobre la cual hemos desplegado y construido nuestra cultura, nuestra economía, nuestra comunitariedad y toda nuestra vida como pueblos. Integralmente la educación propia, la salud propia, nuestros gobiernos, nuestra biodiversidad y riqueza de la madre tierra, nuestros productos, nuestras organizaciones locales, zonales y la regional CRIC, y nuestras relaciones de hermanamiento con los demás sectores sociales, son nuestro plan de vida a la vez que la manera de irlo construyendo cada día. La defensa de la vida es defensa del territorio y resistencia contra todos los modelos externos y poderes

que se oponen a nuestro plan de vida y a nuestra existencia como pueblos.

Haciendo uso del derecho mayor, de la ley de origen, y del reconocimiento a la diversidad contenido en la Constitución colombiana las autoridades indígenas del Cauca agrupadas en el CRIC por medio del parlamento indígena popular vamos avanzando en mandatos para nuestros territorios, en los diferentes campos económico, social, político, cultural y de relacionamiento con los demás sectores sociales dentro de una concepción de unidad en la diversidad.

En el presente mandato los pueblos indígenas del Cauca que constituimos el CRIC, acordamos para nuestros territorios las presentes disposiciones sobre ampliación, constitución y saneamiento de resguardos.

Capítulo Primero:

Disposiciones Generales

- Para los pueblos indígenas es un deber, con nosotros mismos y con la humanidad, y una norma de pervivencia, la conservación y recuperación de los territorios ancestrales que tradicionalmente han constituido nuestro hábitat, y la exigibilidad de otros que sean necesarios para la realización de nuestra economía y nuestra cultura. Lo cual es acorde con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.
- Todas las instituciones del Estado y los particulares deberán actuar acorde con este mandato siempre que se vayan a realizar procesos de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos. El control de cada autoridad indígena sobre la observancia o no del presente mandato deberá ser el primer paso de la consulta previa para procesos de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos; así quedará documentado dentro del procedimiento de la misma, por medio de actas donde se señalen los pro y los contra planteados por la comunidad y la decisión tomada por la misma. La no aplicación de este paso y/o la no conformidad de la autoridad indígena con la observancia del mandato por parte de las instituciones y particulares, será causal de nulidad de todo el proceso de consulta.

- Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son colectivas, inalienables, imprescriptibles e inembargables. No se aceptarán por parte de las comunidades procesos de reestructuración que busquen dar validez a títulos inscritos por particulares que en su momento hayan desconocido este principio de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado. Se exigirá al Estado colombiano que haga explícito que en estos casos, el título de particulares no ha sido debidamente inscrito. Tampoco se aceptarán por parte de las comunidades y sus autoridades, estudios de títulos que busquen nuevamente establecer la existencia legal de los resguardos cuando estos ya hayan sido reconocidos oficialmente por el Estado colombiano.
- La propiedad colectiva es reconocida por tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano y en la Constitución Nacional. Nuestras luchas y nuestro relacionamiento buscarán que a las comunidades campesinas les sean reconocidos los derechos que internacionalmente se definen para las comunidades locales, en pactos firmados por el Estado colombiano, y que el acceso a las reservas campesinas no quede relegado a las zonas de baldíos nacionales sino que pueda ser implementado en cualquier área geográfica del país. Igualmente somos conscientes de la arremetida de la llamada Nueva Ruralidad y del Estatuto de desarrollo rural contra la existencia de una territorialidad y una economía campesina; en nuestras luchas y relacionamiento buscaremos que a campesinos indígenas y afrocolombianos nos sea respetada nuestra posibilidad de vida y pervivencia como tales y de que no seamos convertidos en jornaleros sin tierra o desplazados de nuestros territorios.

El control de cada autoridad indígena sobre la observancia o no del presente mandato deberá ser el primer paso de la consulta previa para procesos de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos

Capítulo Segundo:

Ampliación, Saneamiento y Constitución De Resguardos

- Es deber del Estado colombiano reconocer a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras ancestrales que tradicionalmente ocupamos o que constituyen nuestro hábitat. También debe el Estado garantizar la asignación de tierras adicionales, en condiciones equivalentes con otros sectores de la población, cuando las tierras de que dispongamos sean insuficientes para garantizarnos los elementos de una existencia normal o para hacer frente al posible crecimiento numérico, unido ello al otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras. Para efecto de dichos derechos y garantías, la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos deberá hacerse de manera consultada con los pueblos indígenas, garantizándose su realización progresiva.
- Es deber del Estado instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas del Cauca ratificamos la comisión de negociación establecida por el decreto 982 de 1.999. Esta comisión deberá establecer unas metas creíbles, alcanzables y evaluables para el logro gradual y progresivo de dichas reivindicaciones. Los compromisos establecidos en estas mesas y comisiones por el Estado colombiano son Tratados con nuestros pueblos que deben ser cumplidos.
- Igualmente es deber del Estado colombiano cumplir con los acuerdos hechos con diferentes organizaciones sociales y movimientos en el país. Particularmente para el Cauca recordamos los acuerdos de la Salvajina, los acuerdos con comunidades movilizadas del Macizo

También debe el Estado garantizar la asignación de tierras adicionales, en condiciones equivalentes con otros sectores de la población, cuando las tierras de que dispongamos sean insuficientes para garantizarnos los elementos de una existencia normal o para hacer frente al posible crecimiento numérico, unido ello al otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras

y Suroccidente, y los acuerdos con comunidades urbanas de Popayán. Nuestras luchas por el cumplimiento de los acuerdos buscaremos articularlas con las demás organizaciones sociales, para lograr una exigibilidad al gobierno colombiano sobre el total de los acuerdos firmados.

- Los pueblos indígenas de la Costa Pacífica tienen los mismos derechos que los demás pueblos indígenas de Colombia en torno a la conservación y acceso al territorio constituido por su hábitat tradicional. Ninguna comisión de negociación en que participen representantes de pueblos indígenas del Cauca, aceptará de ningún modo que a los pueblos indígenas de la Costa Pacífica se les niegue estos derechos.
- La tradición de la palabra nos dice que en los planes de vida de cada comunidad expresamos nuestra concepción y uso del territorio. Como entidades territoriales gozamos de autonomía para la gestión de nuestros intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Estos planes nos aseguran que podamos

utilizar la biodiversidad de nuestro territorio para satisfacer nuestras necesidades locales, al tiempo que velamos por que dicha biodiversidad permanezca; garantizando la función social y ecológica de la propiedad acorde con nuestros usos y costumbres. Los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos deberán obligatoriamente articularse con las decisiones de ordenamiento territorial de estos planes de vida. Esta articu-

lación será un tema específico de la consulta previa y deberá ser conceptuada por la comunidad de manera favorable para poder ser implementada.

- La violencia ha sido ejercida de manera permanente contra los pueblos indígenas desde el momento de la llegada de los españoles. Nosotros sabemos qué es la violencia porque la hemos vivido como víctimas. La lucha de resistencia indígena es una lucha no violenta. Las acciones de exigibilidad y rituales de liberación de la madre tierra son un llamado de atención al Estado y a los sectores dominantes en Colombia para la real vigencia del Estado Social de derecho en lo referente a esta temática. Acordamos estas acciones como último recurso a aplicar cada vez que sea completamente clara la inoperancia real de los mecanismos de diálogo y negociación y el incumplimiento de los acuerdos.



VIGENCIA. En desarrollo de la autonomía indígena y de un ejercicio parlamentario de legislación desde la base, este mandato entrará en vigencia desde el momento en que sea aprobado por la Junta Directiva del CRIC.
Territorio de convivencia, diálogo y negociación de la María, Piendamó. Diciembre 14 de 2007.

Capítulo Cuarto:

Tenencia y Uso de la Tierra

Como resultado del proceso adelantado por la Consejería mayor del CRIC, existirá un Plan de vida regional que deberá ser compatible con los planes de vida locales.

- La tenencia y uso de la tierra serán acordes con el ordenamiento territorial definido en el plan de vida formulado por cada comunidad. Estos usos contemplarán no solo los del suelo sino también el subsuelo y el territorio de una manera integral.
- En cada comunidad y de manera coordinada con la Consejería del CRIC se definirá una ETNOUAF (Etno unidad agrícola familiar) consistente en el área dentro de las tierras de usos agropecuarios, con el cual una familia puede tener acceso a niveles adecuados de producción e ingreso, acorde con los usos, costumbres y plan de vida.
- Las autoridades indígenas, tomando como base el Plan de vida y la ETNOUAF propenderán por un acceso adecuado a la tierra por parte de las familias y por condiciones de equidad al interior de las comunidades. Para ello se partirá de un estudio de distribución de la tenencia de tierras al interior de cada territorio indígena. En los casos en que el área de uso agropecuario no sea suficiente para el total de familias de acuerdo a los criterios técnicos de la ETNOUAF y del plan de vida, se realizará el proceso de exigibilidad ante el Estado colombiano. El Plan de vida planteará soluciones en términos de disponibilidad de tierras (ya sea en la zona respectiva o por fuera de la misma) y también en términos de técnicas productivas y de la combinación al interior de la comunidad de otros sectores económicos diferentes al agropecuario.
- Para todos los programas estatales se deberá realizar la consulta previa con las comunidades y autoridades indígenas respectivas del nivel local, zonal y regional (CRIC). En términos de los recursos del Estado para el sector agropecuario, estos deben ser adecuados a las especificidades del Plan de vida; de manera especial deben propender por la seguridad y soberanía alimentaria■

Parlamento Indígena Popular Territorio de Convivencia Dialogo y Negociacion de la Sociedad Civil- La Maria Piendamó

Diciembre 14 De 2007



Medidas Cautelares

El parlamento indígena popular observa la continuidad de una crisis humanitaria que exige la adopción de medidas cautelares en los territorios indígenas.

Desde el entendido que el Estado es el principal responsable de la garantía de los derechos humanos y la aplicación de mecanismos que garanticen la vida digna, consideramos que dadas sus políticas actuales no se asegura que las acciones que lo obligan a cumplir con los derechos de los pueblos se implementen y tengan plena aplicación.

El parlamento indígena popular exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos para que de acuerdo con sus objetivos misionales contribuyan a la implementación, seguimiento y cumplimiento efectivo de las me-

didias cautelares que contemplen los elementos propios de los pueblos indígenas.

El parlamento indígena popular, resalta que son medidas cautelares nuestras, elementos propios referidos al territorio, gobiernos propios, identidades y símbolos, estructuras como la guardia indígena, el saber tradicional como la medicina, teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos.

Resaltamos que en el departamento del Cauca convivimos con sectores urbanos y campesinos que viven similar situación de amenaza, victimización y desconocimiento, que en el marco de este parlamento expresan también la urgente aplicación de medidas cautelares que garanticen el pleno respeto a sus derechos■

Comunidades Indígenas del Cauca y Sectores Populares por la Defensa de la Vida y el Territorio

Consejo Regional Indígena del Cauca - Octubre 2007

(Documento de trabajo, Noviembre 2007)



La implementación del modelo Neoliberal desde la década del 90, vive hoy su mayor auge y, por tanto, las exigencias para la expropiación del territorio y de la población, por parte del gran capital, son cada vez más grandes. Este modelo se expresa en la coyuntura actual como crecimiento económico sin empleo y sin cambio en los grandes índices de pobreza y de inequidad en el país. El Gobierno nacional pretende ocultar esta cara antisocial de su política económica, cambiando no la realidad de desigualdad sino la manera de llevar la estadística, obligando al DANE y las demás instituciones a presentar la situación de una manera

maquillada, por lo cual se ha visto obligado a pedir la renuncia a consecutivos Directores de esta entidad, hasta encontrar alguno que le acepte su “verdad oficial”.

Desde 1.986 hasta ahora, el Consejo Regional Indígena del Cauca ha firmado 12 actas y/o acuerdos con el Gobierno Nacional en búsqueda de acercamiento y atención a las comunidades indígenas del departamento. Nuestra situación se ha tornando tan crítica en términos de derechos que, desde el año 1.999 declaramos la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca. Hoy sabemos porqué el Gobierno nacional no ha cum-

plido lo estipulado en el decreto 982 de 1.999: porqué no es su preocupación la existencia de los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades locales; porqué su interés riñe con el nuestro, ya que de una manera absurda ha decidido defender mas a lo extranjero que a las comunidades ancestrales y a los intereses comunes y estratégicos de los colombianos. No se pueden interpretar de otra manera los proyec-

tos de ley presentados por el Gobierno Nacional y las leyes aprobadas en el Congreso en las últimas legislaturas: Código de Minas, Estatuto de desarrollo Rural, Agro Ingreso seguro, Ley de estabilidad jurídica para inversionistas, Ley Forestal, Reforma al régimen de transferencias, proyecto de ley de aguas, reforma al código penal sobre usurpación de derechos de obtentores vegetales y TLC.



Nuestra Propuesta y Nuestra Lucha

Por ello, nos planteamos una lucha común con los demás sectores populares con las siguientes prioridades:

- Defensa de la vigencia de la reforma agraria y lucha por echar atrás el estatuto de desarrollo rural, el código minero y la ley forestal. Desobediencia civil a estas leyes.
- Convocatoria a un referéndum sobre el agua como derecho y bien público administrado por el Estado y/o por entidades comunitarias sin ánimo de lucro y especial protección a este bien común.
- Convocatoria a un referéndum para el desmonte de la modificación de las transferencias, en defensa de la educación y la salud para los colombianos.
- Acciones de exigibilidad de los compromisos asumidos por el Estado en acuerdos con organizaciones sociales; en particular, para los indígenas, cumplimiento del decreto 982 de 1.999.

- Llamado a la Corte constitucional y establecimiento de acciones jurídicas ante la misma, para declarar la inexequibilidad de estas leyes y del TLC.

Desde la promulgación de la Constitución Colombiana, el mismo Presidente Gaviria que la estrenó, empezó a impedir la realización de sus avances fundamentales; presentándose igual tendencia en los Presidentes que le sucedieron. El actual Presidente ha continuado la campaña contra los logros democráticos de la Constitución del 91, desconociéndola en la practica, y a la vez impulsando reformas lesivas al Estado Social de Derecho, tales como: a) Modificación al derecho de tutela, b) Ataque contra las altas Cortes para ponerlas al servicio del poder ejecutivo c) Reelección presidencial d) Perdida de derechos de los habitantes sobre sus territorios, para entregárselos al gran capital, e) Desconocimiento de la Normatividad y de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Huma-

nos, DIH y Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los últimos avances contra la Constitución del 91 han sido posibles debido a un Congreso con representación decisoria de la parapolítica, pero también por un manejo de opinión pública que le permite al Presidente Uribe índices de favorabilidad superiores al 65%. Este manejo se basa fundamentalmente en la división bipolar que, desde la Presidencia y su aparato de propaganda, se hace del país entre Uribistas y terroristas. Cualquier opinión, organización, dinámica social o política, protesta o movimiento por exigibilidad de derechos que se muestre distinta a las políticas oficiales, y por tanto no Uribista, entra a ser descalificada inmediatamente como terrorista, haciéndose un llamado a la opinión a cerrar filas ciegamente en torno al Presidente como supuesta única opción para la salvación de la patria.

Las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, tenemos claro que un ataque contra el territorio es un ataque contra nuestra pervivencia como pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos. Y en la medida en que estamos hablando de aguas, suelos, recursos naturales, respeto a los pobladores, es un ataque contra Colombia, su seguridad, su integridad y su dignidad. Por ello estamos en resistencia por la vida y el territorio. Tenemos claro que estas políticas se vienen impulsando desde hace varios gobiernos y que así como hemos venido dando la lucha, la continuaremos dando ahora, y llamamos a la opinión nacional y a la comunidad internacional a que, con el sofisma de luchar contra el terrorismo, no se entreguen ni condenen las luchas populares, el Estado Social de Derecho y el territorio nacional.

No se trata, por nuestra parte como comunidades indígenas del Cauca, de realizar una oposición por principio al Gobierno Nacional. Quienes conocen nuestras actuaciones saben que, en la defensa y avance en nuestros derechos, ante la ausencia de políticas específicas que garanticen la diversidad étnica y cultural,

Las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, tenemos claro que un ataque contra el territorio es un ataque contra nuestra pervivencia como pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos

hemos tenido que aceptar entrar a participar en programas y mecanismos institucionales en salud y educación, así como en instancias como la mesas de concertación nacional entre indígenas y gobierno nacional y las mesas del decreto 982 de 1.999. Sin embargo, el avance legislativo y la represión contra las comunidades más pobres del país, nos llaman a no quedarnos únicamente en la participación formal en estos espacios, sino que nos obligan a profundizar en la resistencia popular contra el proyecto de muerte que avanza en nuestro país.

En la medida en que nos hemos ido manifestando en la denuncia de esta andanada legislativa

en contra del pueblo colombiano, el Gobierno ha ido enfilando sus ataques hacia nosotros. Son ya cotidianas y permanentes las salidas del Ministro de Agricultura por los grandes medios del país, con ataques a nuestro movimiento. Prácticamente se rasga las vestiduras afirmando que los indígenas no tendremos un centímetro mas de tierra en el país, pretendiendo con ello que está defendiendo los intereses de los demás sectores nacionales, cuando lo cierto es que

la mayoría de los colombianos estamos siendo expropiados en favor de las transnacionales.

Una clara demostración del gobierno nacional en contra de los indígenas ha sido la de abstenerse a votar positivamente la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas, en contravía de la mayoría de los países del mundo, el pasado 13 de septiembre de 2.007. Para los sectores dominantes y sus planes de entrega del territorio nacional al gran capital, los derechos humanos de los pueblos indígenas son un estorbo. Dentro de los 4 países que votaron en contra de la declaración se encuentra EEUU. Colombia se abstuvo, siendo el único país latinoamericano dentro de 11 abstenciones en total. La declaración fue aprobada por una mayoría de 143 países a favor. Esta actitud se suma al desconocimiento práctico que se ha venido haciendo del mecanismo de la consulta previa con pueblos indígenas, garantizado por convenio 169 de la OIT, que Colombia ratifico

con su firma y que fue incluido en la legislación interna como ley 21 de 1.991.

En nuestro andar y dialogo como pueblos, con los afrocolombianos, campesinos y sectores urbanos, hemos identificado algunos de los elementos lesivos de la legislación contra la vida y el territorio presentada por el Gobierno nacional y aprobada por sus mayorías en el Congreso de la República, los cuales presentamos a continuación.

Legislacion del Despojo:

LEY GENERAL FORESTAL (Ley 1021 de 2.006)

Aunque la esencia de la propuesta del Gobierno nacional, ante la presión de sectores sociales y ambientalistas tuvo que ser objetada por el mismo Presidente de la República luego de ser aprobada por el Congreso, aún persiste el temor de que como los cambios se dieron en los artículos mas explícitamente cuestionados, la letra menuda de otros artículos aún permita que la normatividad lesiva subsista y sea aplicada. Dentro de esta normatividad uno de los puntos mas cuestionados fue el de el permitir que el bosque natural sea explotado por las empresas madereras; otro de los puntos es el de desconocer a los indígenas y afros la propiedad sobre sus bosques, para permitir la explotación por terceros; como ya está dicho, a pesar de que los artículos respectivos fueron eliminados, preocupa la intención inicial del Gobierno y el hecho de que el Congreso lo hubiera aprobado a instancias del Ministro de agricultura, quién no cesaba de defender esta propuesta y declarar su utilidad para la Nación.

CODIGO MINERO (Ley 685 de 2.001)

Desconoce la minería artesanal y a los pobladores de los territorios y, en cambio de garantizarles su apoyo y protección, los señala como ilegales y los pone a competir de igual a igual con las grandes multinacionales de la minería. Ya se está viendo la exigencia a los alcaldes municipales para que cierren las minas y expulsen a los mineros artesanales, así sea convirtiendo ello en un problema de orden público. Episodios como la tragedia sucedida a los mineros del municipio de Suárez, Cauca, en octubre de este año, serán utilizados no para concientizarse de la situación de los pobladores locales que viven de la minería artesanal sino para poner mas cortapisas al funcionamiento de la misma, con el fin de entregársela a la minería de cielo abierto, es decir a las multinacionales.

La promoción y búsqueda de inversión en la minería de cielo abierto se convierte en una amenaza sobre los habitantes de las regiones del país (incluso de las zonas urbanas en la medida en que este es el único país del mundo en que se permite la explotación en estas zonas), ya que la cantidad de explosivos en la explotación, químicos en proceso de lixiviación, remoción de escombros, qué esta clase minería utiliza atentarán contra fauna y flora, ríos y aguas, y los usos culturales y productivos que las comunidades hacen sobre sus tierras y territorios. Ello es más grave en la medida en que la ley prevé que el manejo del medio ambiente queda en manos de los mismos explotadores, quienes son los que determinan si se adicionan o no cambios en todo el proceso de exploración, explotación y cierre de la mina.



Particular preocupación genera la declaratoria que hace esta ley de la minería como proyecto prioritario de inversión social, ya que implica que puede sobreponerse a cualquier uso acordado localmente para el territorio, como en el caso de las áreas ambientales protegidas o los definidos desde las autoridades propias indígenas y afrocolombianas; es decir que el capital inversionista en minería tendrá todas las garantías y facilidades para actuar y transformar de manera muy negativa nuestro territorio, en tanto que la minería artesanal, no importa su relación ancestral con el territorio, tendrá todas las dificultades posibles para seguir existiendo. En el caso de las comunidades indígenas es sabido cómo la consulta previa se ha venido burlando y dejando sin efectos prácticos por parte de inversionistas y Estado.

Comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas han planteado su inquietud en varios espacios respecto a la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti que con el nombre de Kedhada está haciendo presencia en varios municipios de nuestro departamento, y que se sabe tiene solicitudes de exploración en 30 municipios del Cauca; cuya presencia está respalda y avalada por el Ministerio de Minas con sus exigencias ante las autoridades locales para la declaratoria de ilegalidad y cierre de las actuales minas artesanales. Sin embargo, nadie atiende las preocupaciones de las comunidades, habitantes de estos territorios.

Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2.007)

Este Estatuto pretende acabar con cualquier posibilidad de reforma agraria en nuestro país, y legalizar la expropiación de tierras que se ha dado en las últimas décadas por medio del desplazamiento, en beneficio de los narcotraficantes y demás patrocinadores de los grupos paramilitares.

Esta ley permite que no se necesite probar la propiedad de la tierra mostrando el título originario del Estado o la cadena de compra-ventas a partir de él sino para un periodo de tiempo dentro de los 10 años anteriores a la aprobación

La Ley da también un fuerte golpe a las luchas campesinas, que habían exigido y logrado la constitución de las zonas de reserva campesina.

de la ley (es decir entre 1.997 y 2.007). Así, cualquier escritura anterior a 1.997 no necesitará probar legalidad en la compra sino simplemente haber sido registrada. Como en las décadas de 1.980 y 1.990 se presentó un gran desplazamiento en el país, calculándose que más de 4 millones de hectáreas fueron adquiridas ilegalmente por el narcotráfico, está claro que con el Estatuto de desarrollo rural estas tierras serán legalizadas en favor del mismo. Por demás, la ley no hace ninguna excepción al respecto para territorios étnicos, por lo cual es bastante posible que empiecen a salir a flote escrituras particulares inscritas en registros públicos anteriores a 1.997, sobre áreas de resguardo o territorios colectivos de comunidades negras; hay quienes, desde posiciones contrarias a los indígenas y afrocolombianos, ya hacen cuentas alegres sobre el efecto coladera que ello ocasionará sobre los territorios étnicos.

La Ley da también un fuerte golpe a las luchas campesinas, que habían exigido y logrado la constitución de las zonas de reserva campesina. Ahora, estas zonas solamente podrán ser creadas en las áreas en que predominen tierras baldías, es decir las zonas de colonización. Pero, además en áreas de baldíos, los campesinos en su aspiración de zona de reserva campesina, tendrán que competir por adjudicación de tierras con los grandes empresarios e inversionistas a quienes la ley define como destinatarios de la adjudicación de baldíos, con el fin de constituir zonas de desarrollo empresarial.

Anticonstitucionalmente y contrario al Derecho Internacional, se prohíbe constituir o ampliar resguardos Indígenas en la Costa Pacífica. De una manera demagógica se ha dicho a los afrocolombianos que ello es para garantizarle los territorios previstos en la Constitución y en la ley 70 de 1.993; lo que no se les ha dicho es que la verdadera destinación prevista por el gobierno para estas tierras es la de constituir áreas de desarrollo empresarial con las grandes empresas e inversionistas. De todas maneras la historia reciente clarifica como, incluso las tierras ya entregadas a los afrocolombianos como territorios colectivos, les están siendo arrebatadas,

con aval del mismo Estado, para entregárselas a los empresarios de la Palma.

Así como se prohíbe comprar tierras para ampliar o constituir resguardos en la Costa Pacífica, y con el mismo desconocimiento y atropello de la Constitución, para las demás zonas del país se ordena que los procesos de constitución y ampliación de resguardos deban articularse a las decisiones de Ordenamiento Territorial de los municipios y departamentos. Ello que pareciera simplemente la búsqueda de coherencia entre planes y entidades territoriales, es ni más ni menos que un “mico” que pretende que no se compre ni un centímetro más de tierra para indígenas, como ya lo ha expresado muchas veces el Ministro de Agricultura, ya que, acorde con la experiencia que se ha presentado en el departamento del Cauca, bastará que en los Planes de Ordenamiento Territorial se defina que no se podrán comprar tierras para indígenas, como ya ha pasado en Piendamó y Caldon, para que ni siquiera de sus recursos propios las comunidades puedan tener acceso a tierras.

Sabiendo que las comunidades indígenas ante el atropello de la ley, no se quedarán quietas esperando su paulatina desaparición, y previendo que se realicen acciones

se ordena que los procesos de constitución y ampliación de resguardos deban articularse a las decisiones de Ordenamiento Territorial de los municipios y departamentos

de exigibilidad de los derechos, la ley se anticipa a los hechos y señala que no se podrá titular a indígenas ni afros ningún predio que pretenda ser reivindicado mediante violencia. Se pretende así cortar de tajo, una lucha de siglos en donde las comunidades han tenido que utilizar las vías de hecho contra la violencia y el genocidio aplicados por los antecesores de esas mismas castas que hoy están en el poder del Estado. Respecto a los campesinos, también se señala que no se podrán adquirir predios invadidos.

En general el Estatuto de Desarrollo Rural se inscribe en la llamada Nueva Ruralidad. Desde una concepción de desconocimiento del poblador rural se parte de que indígenas, campesinos y afrocolombianos tienen incapacidad para avanzar en una economía empresarial, la cual se postula como la única posible, y por tanto la dirección del campo debe ser asumida por los empresarios quienes avanzarán en proyectos agropecuarios, turísticos, mineros, comerciales, etc., y los pobladores rurales deberán en su mayoría abandonar el territorio, quedándose los que logren encadenarse bajo alianzas estratégicas a estos procesos empresariales, en los cuales actuarán de manera dependiente, ya sea como empleados, jornaleros o productores locales sin ninguna decisión en la cadena. Los productos de economía campesina, de seguridad y soberanía alimentaria, no cuentan



en esta concepción, ya que la economía internacional ha definido para la nueva ruralidad cuales son los productos útiles en el mercado global. Consecuente con esto, para el Estatuto la posibilidad de acceso de los campesinos a la tierra, el crédito y la asistencia técnica, debe partir de proyectos productivos, avalados por alianzas es-

tratégicas, e inscritos en cadenas productivas. En este esquema no tienen espacio ni posibilidad las comunidades indígenas, afrocolombianas ni la economía campesina. En este esquema los pobladores rurales y las comunidades locales son un estorbo para la adecuada realización del capital y la entrega del territorio a los inversionistas.



PROYECTO DE LEY DE AGUAS

El gobierno nacional ha presentado en legislaturas pasadas al Congreso la propuesta de ley de aguas. Esta propuesta aún no se ha aprobado; sin embargo es claro que la principal intención de la misma es la de garantizar el manejo de este recurso a través de operadores privados que garanticen la racionalidad y la eficiencia en su manejo. A pesar de que se lo asume como recurso estratégico no se concibe que su privatización entre en contradicción con su utilidad común. En la propuesta se definen la manera de realizar las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, los permisos de vertimiento, las tasas por uso y tasas retributivas, la institucionalidad responsable, etc. No hay avances en considerar el agua como un derecho ni como un bien común.

De todas maneras, independiente de la aprobación de la ley de aguas, ya desde la ley 142 de 1.994 se define que la prestación de servicios públicos debe llevarse a través de Empresas de

...propuesta de ley de aguas...
...aún no se ha aprobado;
la principal intención es
la de garantizar el manejo
de este recurso a través de
operadores privados que
garanticen la racionalidad y
la eficiencia en su manejo.

Servicios Públicos constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas urbanas específicas. Como poco se había aplicado esta ley en la mayoría de los municipios del país, durante el mes de marzo presente año se produjo documento CONPES 3463 que

plantea los programas de modernización empresarial y la coordinación de programas y proyectos, de manera que los recursos de la Nación se asignen únicamente a los municipios que cumplan con estas disposiciones. Así a través de los Planes departamentales de Agua y saneamiento se colocará en cintura a los municipios para que se ajusten a la normatividad. El procedimiento invocado es que los municipios creen sus Empresas de servicios públicos, y que si estas no están en capacidad de garantizar el servicio, entreguen en concesión el agua a inversionistas privados. Nada se dice sobre las aguas que manejan las comunidades y la propiedad que estas tienen sobre áreas de conservación

El procedimiento invocado es que los municipios creen sus Empresas de servicios públicos, y que si estas no están en capacidad de garantizar el servicio, entreguen en concesión el agua a inversionistas privados. Nada se dice sobre las aguas que manejan las comunidades y la propiedad que estas tienen sobre áreas de conservación

ambiental. En todo caso, ante la eventualidad de administración desde las mismas comunidades o por grupos asociados dentro de ellas, tendrían que competir en igualdad de condiciones con los grandes inversionistas.

Las aspiraciones de una gran parte de comunidades del país en el sentido de que el agua es un derecho humano fundamental y por tanto debe garantizarse una cantidad mínima a cada familia en forma gratuita; que como servicio público sea administrada solo por el Estado o por entidades comunitarias sin ánimo de lucro; que se garantice el goce efectivo, acorde con sus usos y costumbres a indígenas, afrocolombianos y campesinos; que exista una especial protección y fomento de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, los ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico y en particular las zonas necesarias para el recargue de acuíferos, etc., no se notan por ningún lado como preocupación en dichas normas y en el proyecto de ley; y es claro que estas aspiraciones entran en contradicción con la política explícita del gobierno de entregar este bien común a la inversión privada.

Desconocimiento completo existe también, por parte de las Normas y del proyecto de ley, de las comunidades en cuyos territorios se encuentran los nacimientos de agua y las zonas de protección, e incluso ya se han empezado a ver programas y proyectos en donde se prevé entregar estas zonas a las empresas privadas como en el caso del agua del Macizo y el grupo Ardila Lulle. Nuevamente, las comunidades locales son vistas como un problema y no como los primeros llamados a decidir sobre sus vidas, territorios y recursos.

Centros de Coordinación de Acción Integral

La estrategia que viene a confirmar como toda la legislación colombiana apunta al control del territorio por el gran capital es la de los centros

de coordinación de acción Integral diseñados por la Presidencia de la República y apoyados por la Embajada USA y el Comando Sur de los EEUU. La estrategia consiste en la coordinación interagencial para la recuperación social del territorio y abarca inicialmente 53 municipios en 9 zonas del país. Estas zonas son: Córdoba, Sierra Nevada, Catatumbo, Arauca, Putumayo, Sur (Caquetá, Guaviare y Meta), Tumaco, Norte del Cauca, Medio y Bajo Atrato.

Los Centros de Coordinación de Acción Integral garantizarán la presencia militar del Estado y acciones integrales económicas y sociales como complemento a la defensa y seguridad democrática. Se desarrollará inicialmente a través de la II fase del Plan Colombia pero plantea que toda la cooperación internacional se articule en la misma.

¿Que significa complemento entre la acción militar y la acción integral económica y social? Nosotros la analizamos como la repetición de la receta de los últimos años: expulsión y amendrantamiento de la población, expropiación del territorio o control del mismo desde intereses ajenos a la población, y a partir de dicho control, producto de esta violencia ejercida, aplicación de la Nueva Ruralidad para beneficio de la gran inversión.

¿Por que se plantea el Norte del Cauca como zona de recuperación social del territorio? ¿Acaso van a devolver a las comunidades indígenas, afrocolombianas e indígenas, las tierras en manos de las grandes plantaciones de caña o las ocupadas por las industrias de la ley Paez; o por el contrario, aspiran a controlar mas territorio para estas empresas? ¿No será que la recuperación del territorio consiste en quitarlo a quienes en este momento y desde siglos hacemos presencia en él y lo reivindicamos desde un modelo económico y social equitativo e incluyente? Una cosa es clara para nosotros: en la recuperación Social del territorio planteada por el Estado Colombiano, indígenas, campesinos y afrocolombianos, somos considerados población no viable■

Tenencia de Tierra en el Cauca y Comunidades Indígenas



I. Concentración de la Propiedad de la Tierra en el Departamento del Cauca

A pesar de años de la existencia oficial de la reforma agraria, el Cauca continúa siendo un departamento con un alto grado de concentración de la tierra,

como se puede observar en el siguiente cuadro, hecho con base en las propiedades que aparecen en catastro, luego de descontar las tierras de resguardo.

Área	Predios	Propietarios	% de propietarios	Superficie Hectareas	% de superficie
Menos de 1 Ha.	72.991	81.020	39.49	26.037	2.0
1 a menos de 3 Has.	41.560	49.063	23.91	71.064	5.4
3 a menos de 5 has.	17.122	21.206	10.34	64.751	4.9
5 a menos de 10 has.	17.662	22.524	10.98	123.090	9.3
10 a menos de 15 has.	7.450	9.739	4.75	89.858	6.8
15 a menos de 20 has.	3.986	5.211	2.54	68.347	5.2
20 a menos de 50 has.	7.811	10.434	5.09	238.765	18.0
50 a menos de 100 has.	2.531	3.440	1.68	170.928	12.9
100 a menos de 200 has.	1.044	1.476	0.72	140.969	10.6
200 a menos de 500 has.	466	743	0.36	134.481	10.1
500 a menos de 1000 has.	78	150	0.07	53.030	4.0
1.000 a 2.000 has.	20	67	0.03	25.813	1.9
Mayor a 2.000 has.	7	90	0.04	119.590	9.0
TOTAL	172.648	205.163	100	1.326.724	100

Fuente Cálculos CRIC, con datos de catastro de IGAC. 2003 e INCODER. 2003

De los anteriores datos queremos resaltar:

- a) el 40% de los propietarios no tienen más que el 2% de la superficie. En tanto el 0.5% de los propietarios tienen el 25% de la superficie.
- b) el 73% de los propietarios tiene el 12% de la superficie.
- c) el 84% de los propietarios tiene menos del 22% de la superficie.
- d) el 49%, casi la mitad de la superficie, se encuentra en terrenos mayores de 50 hectáreas; esta superficie es de propiedad del 3% de los propietarios.
- e) el 25% de la superficie se encuentra en propiedades mayores de 200 has.
- f) El total de superficie corresponde a la de los predios que aparecen en catastro menos la de los resguardos, ya que estos no aparecen con su distribución por familias. En total la superficie del Cauca es de 3 millones treinta y ocho mil ochocientos (3.038.800) hectáreas, de las cuales un millón ciento setenta mil doscientas setenta y cinco son baldíos (que no quiere decir vacíos), y un millón ochocientos sesenta y ocho mil quinientos veinticinco (1.868.525) hectáreas están en catastro.



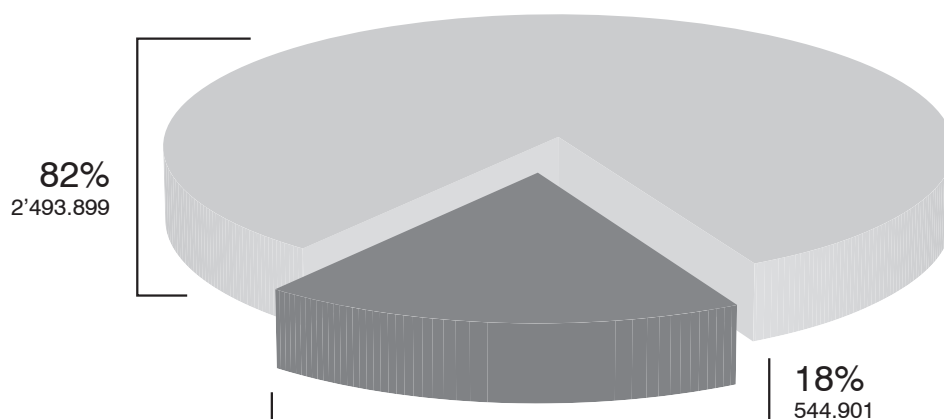
II. Propiedad Comunal de los Resguardos

Los territorios legalizados, o en proceso de legalización, de los resguardos suman un total de 544.901 has. Estos territorios corresponden a resguardos coloniales con título vigente, así como a procesos de ampliación, constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. En esta cifra también se incluyen predios que han sido entregados por acta a las comunidades, pero que aún no han sido legalizados completamente. La mayoría del territorio indígena es la prolon-

gación de propiedades que han tenido la capacidad de conservar las comunidades indígenas durante siglos de ataque contra la forma de resguardo. Durante el tiempo de vigencia de las leyes de reforma agraria no han sido compradas por el Estado colombiano mas de 80.000 has ya sea para sanear, ampliar o constituir resguardos.

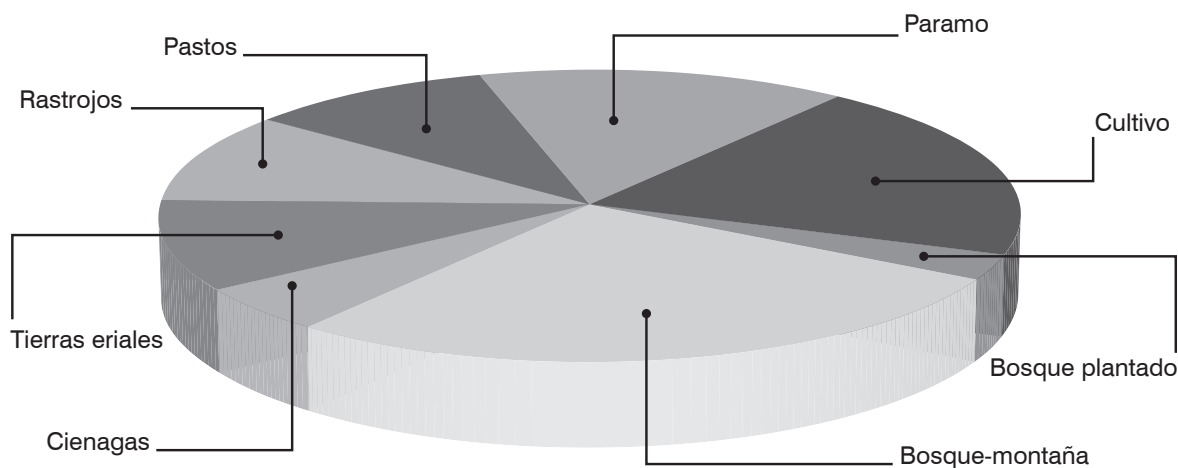
La superficie del territorio indígena según la cifra señalada corresponde al 18% del total departamental.

Superficie Tenencia Indígena sobre total departamental



Combinando informaciones sobre el uso del suelo del Plan ambiental Indígena, de los estudios socioeconómicos y de las mismas comunidades se llega a la conclusión de que de este total únicamente 191.237 hectáreas se pueden considerar productivas o sea las representadas en cultivos, pastos y bosque plantado.

Usos Indígenas



Tomando un censo de 51.119 familias, tenemos un promedio de 3.7 hectáreas por familia, muy por debajo de la Unidad agrícola familia para la zona, que oscila entre 6 a 8 hectáreas.

III. Necesidades de Tierra para las Comunidades Indígenas

Según estudios socioeconómicos realizados por el INCODER, acorde con lo que ordena la ley, y actualizados a junio de 2004, las necesidades de tierra para las comunidades indígenas del Cauca suman en total 218.106 has. Estas necesidades son definidas para cada comunidad acorde con la clase de suelo en cada zona, la etnouaf (etnounidad agrícola familiar) en cada territorio, el número de familias, la tenencia actual, etc. Estos estudios fueron realizados como cumplimiento de acuerdos al interior de la comisión del decreto 982 de 1999.

Las comunidades indígenas por su parte han identificado posibles predios para su ampliación o constitución de resguardo.

También se tienen identificadas por el INCODER las ofertas voluntarias de venta realizadas ante el INCORA y/o el INCODER, por propietarios en diferentes zonas del departamento, encontrándose ofertadas a diciembre 31 de 2003, 590 predios que sumaban 65.884 has, cifra importante si se tiene en cuenta que muchos propietarios no ofertan pues saben de la lentitud de los trámites o la falta de apropiación de recursos en el gobierno nacional.

que muchos propietarios no ofertan pues saben de la lentitud de los trámites o la falta de apropiación de recursos en el gobierno nacional

En acuerdo realizado en diciembre de 2.005 con las autoridades indígenas, el Gobierno nacional se comprometió a la entrega en el año 2.006 de 8.000 hectáreas repartidas en las 8 zonas del Cauca; de ellas se ha cumplió con 3.081 hectáreas, aunque muchas de ellas ya estaban en manos de las comunidades desde hacía años, y lo que se hizo fue legalizarlas pagándolas a sus

anteriores propietarios. Actualmente hay ofertadas directamente para comunidades indígenas, 106 predios que suman un total de 7.161 hectáreas.

En el acuerdo del Gobierno nacional con la Corte Interamericana de derechos humanos a raíz de la masacre del Nilo Caloto en 1.991, la Nación se comprometió a dotar de tierras a los resguardos de la zona Norte por un total de 15.662 hectáreas, de las cuales hasta el momento se han entregado 9.860.

En este año 2007 la situación de tierras se ha agravado por la emergencia ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Huila, y la posibilidad de que ello vuelva a suceder próximamente. El desplazamiento por este motivo en el municipio de Páez genera una necesidad de tierra adicional aproximadamente de 15.000 hectáreas.



IV. Base Legal y Constitucional de la Territorialidad Indígena

- Artículo 63 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de la propiedad colectiva de los resguardos y se consideran como inalienables, imprescriptibles e inembargables. El artículo 329 ratifica la propiedad colectiva de los resguardos y su característica de no enajenables.
 - Artículo 286 establece que los territorios indígenas son entidades territoriales con autonomía para gobernarse y gestionar su desarrollo.
 - La sentencia T-188/93 de la Corte Constitucional señala que “el derecho de propiedad colectiva ejercida sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente el constituyente resalta la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas”.
 - Continúa la Corte: “Sin este derecho, los anteriores (derecho a la identidad cultural y a la autonomía) son solo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual es asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y de los que configuran su hábitat.”
 - En sentencias T342/94 y T652/98 se insiste en lo anterior y se agrega “los resguardos son instituciones conformadas por una parcialidad indígena que con un título de propiedad comunitaria posee su territorio y se rige para...“el derecho de propiedad colectiva ejercida sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes... Adicionalmente el constituyente resalta la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas”
- el manejo de este y su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales y cuyos objetivos, entre otros, apuntan a la protección del ambiente de un grupo étnico y cultural.”
- El convenio 169 de la OIT firmado por el Estado colombiano y ratificado por el Congreso de la República como ley 21 de 1991, señala:
En su artículo 13:
 1. al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
 2. La utilización del termino “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo cual cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.
- En el artículo 14:**
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente utilizadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
 2. los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicio-

nalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

En el artículo 19:

Los Programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

- a. la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico,
- b. el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

V. Decreto 982 de 1999

Aunque en la jerarquía normativa está en uno de los niveles mas bajos, el decreto 982 de 1999 ha sido tomado como uno de los mecanismos mas importantes para el movimiento indígena caucano ya que es resultado de movilización de las comunidades que logran por medio de el mismo que la constitución y la ley vayan asumiendo características de políticas publicas y logren concretar programas e inversiones.

El decreto 982 de 1999, aunque integro una serie de acuerdos realizados durante la década del 90 las cuales se referían a predios y áreas específicas, tuvo su principal contenido en el hecho de que el gobierno nacional se compro-

mete a trabajar con las comunidades indígenas en la solución de la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca; creando para tal efecto una comisión de alto nivel entre comunidades y gobierno nacional.

Las comunidades indígenas buscando el desarrollo del espíritu de la Constitución nacional sobre concertación y participación, prefirieron durante la década del 90 acudir a mecanismos como la comisión del decreto 982 de 1999, antes que a mecanismos como la toma directa de tierras que se habían implementado durante las décadas del 70 y el 80. Sin embargo, la participación en estos mecanismos no ha mostrado más que la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y la improvisación institucional. Desde que entro en vigencia la constitución de 1991 hasta la firma del convenio de la María se habían comprado por el INCORA, el Ministerio de Gobierno y Nasakiwe, 17.635 hectáreas; de las cuales 6.013 hectáreas correspondieron a

la indemnización por la masacre del Nilo. Un promedio de 1960 hectáreas por año que dadas las necesidades planteadas nos ubican en un panorama de bajas posibilidades de resolución.

Durante la vigencia del decreto 982 de 1999, lo mas importante que se ha logrado en el tema de tierras es ubicar la necesidad de las comunidades, que como ya se dijo, se-

gún estudios socioeconómicos del INCORA es de 218.000 hectáreas. Sin embargo la adquisición de tierras ha sido mínima, después de la firma del decreto■



Mandato por la Dignidad y la Construcción de un Nuevo País



Consulta Previa

1. No acatar las leyes lesivas que a demás de inconsultas afectan los derechos de los pueblos indígenas que no con las autoridades y pueblos indígenas.
2. Ningún proceso de consulta puede pasar por encima de los territorios tradicionales.
3. Definir entre las comunidades indígenas y autoridades los principios, criterios y procedimientos para la aplicación de la consulta interna en nuestros territorios.
4. El Estado colombiano no debe delegar en terceros, su responsabilidad en los procesos de consulta de consulta previa.
5. Entre el Estado colombiano y las autoridades y organizaciones indígenas debe llegarse a una definición de criterios para la aplicación de la consulta previa.
6. Rechazar la presencia de multinacionales y de toda intervención del Estado que estén en contra de nuestras comunidades y territorios.
7. Lograr desde la lucha social que la consulta previa en caso que sea considerada valida por estas comunidades, sea aplicada en territorios campesinos y afrocolombianos y denas sectores sociales y urbanos del pais.

Autonomía y leyes propias

1. Que el gobierno, el Congreso y las cortes reconozcan nuestras leyes propias, y que para legislar se respeten las normas que hemos establecido en asambleas y congresos para nuestros territorios.
2. Construir como pueblos indígenas y tradicionales una legislación propia desde la autonomía, unidad y territorio, que confluya en Planes de vida que permitan nuestra pervivencia como pueblos y que sean respetados por el Estado.
3. Que se respete nuestro derecho propio y ancestral para juzgar a los violadores de Derechos Humanos y de DIH en nuestros territorios.
4. Los pueblos indígenas en cada uno de nuestros territorios continuaremos formulando y aplicando nuestros propios planes de estudio, en nuestra lengua, cosmovisión y ritualidad, y ello debe ser respetado por el Estado.
5. La madre tierra es nuestra madre; el territorio de nuestros pueblos debe ser respetado por el Estado.
6. Este espacio que hoy instalamos lo declaramos permanente. Es un espacio paralelo al ilegítimo Congreso de la República. Llamamos a otros sectores populares a que trabajemos conjuntamente para legislar desde nosotros mismos.
7. La guardia indígena y los demás sistemas de control territorial, son reconocidas por nuestras autoridades y comunidades y así debe serlo por el Estado y todos los actores armados. No debe entrar actores armados a nuestros territorios y los que ya están deben salir.
8. Determinamos Desobediencia civil en relación a las leyes que son lesivas a nuestros derechos, al ejercicio de la autoridad y autonomía y al territorio.
9. Las simbologías propias son los símbolos oficiales en nuestros territorios.
10. Los planes de desarrollo municipal y departamental deben garantizar recursos para el ejercicio de la autonomía de los pueblos.
11. Las autoridades indígenas son las principales autoridades ambientales en nuestros territorios.



Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.

1. Rechazamos el Tratado de Libre Comercio. Si se llegare a firmar por ambos países no será aplicable en los territorios colectivos de indígenas, afrocolombianos y campesinos, lo que garantizaremos con nuestra resistencia.
2. Como pueblos originarios, declaramos que nuestro territorio y diversidad no están en venta ni los vamos a negociar. No son válidas las patentes y propiedad intelectual particular sobre nuestros productos y procesos, ya que son nuestro patrimonio común.
3. La hoja de coca es sagrada por lo tanto debe ser respetada en todo el país y no son válidas las normas y políticas que atentan contra ella.
4. Las multinacionales, los grupos armados y la fuerza pública deben salir de nuestros territorios.

Mandato Agrario

1. Reafirmamos nuestra lucha y compromiso por una verdadera reforma agraria y rechazamos el estatuto de desarrollo rural, el cual no acataremos en nuestros territorios.
2. La soberanía y autonomía alimentaria es la base de nuestro modelo de desarrollo propio y debe serlo también para el pueblo colombiano.
3. Apoyamos y nos comprometemos con las conclusiones del Mandato Agrario en el sentido de realizar una agenda común con todos los sectores populares del país, para lograr una verdadera reforma agraria integral.
4. La tierra de los desplazados debe ser respetada y devuelta a sus dueños y se deben garantizar todas las condiciones para su retorno colectivo indemnizando y reparando integralmente a las víctimas. No permitiremos la legalización del despojo y la violencia, que se autoriza por medio del Estatuto de desarrollo rural y la ley de justicia y paz.
5. La emergencia de los pueblos indígenas, y en particular la emergencia ambiental, declarada por las autoridades propias, debe ser respetada por el Estado, ya que no se hace, como en el caso de la amenaza por el Volcan Nevado del Huila en Tierradentro, el Macizo colombiano, el pueblo yukpa, etc. . Reafirmamos la Emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas .
6. Exigimos el respeto a los títulos coloniales de los territorios indígenas.



Agenda

1. Derogar las leyes que atentan contra nuestros pueblos
2. Quitar la investidura y sancionar a perpetuidad a los Congresistas corruptos y no dejar que sus segundos ocupen las curules
3. Ordenar y avanzar en la investigación de militares que hayan violado los Derechos humanos.
4. Sistema de comunicación para la verdad y la vida
5. Ilegítimo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez porque está actuando contra el pueblo.
6. Reconocemos la existencia del conflicto armado, exigimos su solución negociada. Respalamos la exigencia a las partes la realización de un acuerdo humanitario inmediato.
7. Definir y desarrollar una agenda de trabajo colectivo con otros sectores.
8. Agenda de cara al país para nuestro propio gobierno legítimo, incluyente y participativo.
9. Ética de unidad, que rompa paradigmas, cree confianzas, criterios y principios para el nuevo país, proyecto construido desde todos.
10. Establecer esta agenda común como compromiso, caminarla por todo el país y volver a encontrarnos en un Congreso Nacional Popular para avanzar hacia un nuevo país. Continuar desarrollando la construcción de región.
11. En el marco del sexto congreso de la ONIC crear el parlamento indígena quien legislara desde las leyes de origen de los pueblos indígenas.
12. Avanzar en la conformación del tribunal nacional de justicia de los pueblos indígenas■

En Marcha por la Dignidad, la Soberanía, el Territorio y el Cumplimiento de Acuerdos en el Cauca y Macizo Colombiano

*Comité de Integración del Macizo-CIMA
Coordinación Agrominera del Macizo y Sur del Cauca
Consejos Comunitarios del Sur*

La Depresión, Imponente Macizo Colombiano, Noviembre 19 de 2007



Somos mujeres y hombres caucanos y nariñenses, que histórica y continuamente se nos han desconocido nuestros derechos y propuestas a producción, trabajo, salud, educación y vivienda dignos, a tierra y territorio, a la pequeña y mediana minería.

El Estado Colombiano y sus gobiernos permanentemente además de negar nuestros derechos humanos y constitucionales han pretendido que la imposición, politiquería, pobreza, exclu-

sión, silencio y represión, sean el ambiente en el que crezcan nuestras familias y comunidades, condicionándonos sólo a recibir programas asistencialistas.

Ante esta situación nos esforzamos, desde 1.985, por integrarnos, desarrollar experiencias y respuestas propias, generar alternativas que con la reunión, encuentro, asambleas, cumbres, audiencias, paros, marchas movilizan nuestra vida digna, integración regional y desarrollo propio.

Integrados con indígenas, afros, mujeres, jóvenes, urbanos y otros campesinos hemos realizados foros y audiencias públicas, en el 2.003 y 2.004 marchamos a Cali, en el 2.006 convocamos en la Cumbre organizaciones sociales al Gobierno, en agosto del 2.007 nos movilizamos al Parlamento a Bogotá. Lo anterior para interlocutar y requerir sobre leyes y decisiones del Presidente y Congreso, que desconocen nuestra cultura, aumentan la pobreza y niegan el ejercicio de nuestros derechos en nuestros territorios y comunidades.

La tierra, el territorio centro de vida y trabajo agrícola digno, fuente de alimentos, origen de tradiciones, costumbres y paisanaje, base de organización comunitaria y social es negada o agredida, se hace necesario poseerlo y recuperarla¹. En el Cauca donde poseer mucha tierra es poder y donde el poder da muchas tierras aunque no se tengan produciendo, la gran mayoría de familias campesinas no poseen tierra o subsisten en microfundios y minifundios que no se acercan a la famosa

sobre leyes y decisiones del Presidente y Congreso, que desconocen nuestra cultura, aumentan la pobreza y niegan el ejercicio de nuestros derechos en nuestros territorios y comunidades

Unidad Agrícola Familiar-UAF. En muchas zonas hoy el jornal apenas alcanza los \$ 2.000. Frente a este olvido y exclusión comunidades para subsistir han cultivado coca, y con las fumigaciones y erradicaciones forzosas se agrava el ciclo: “po-

breza- políticas públicas y mayor pobreza y desesperanza”.

Ahora llegan transnacionales como la Kedahda, que aprovechándose de las ventajas dadas por el Código minero y el Gobierno, de la pobreza de la gente y del desconocimiento del trabajo duro, cotidiano e histórico de pequeños y medianos mineros pretende apropiarse de la riqueza natu-

ral del Macizo, dejándonos como lo ha hecho en varios sitios de Colombia el despojo de tierras, los huecos, la pobreza, las víctimas y los desastres ambientales.

El agua y la biodiversidad cultivada ancestralmente por indios, campesinos y negros hoy se pretende privatizar, desconociendo la inmensa deuda y retribución que se les debe a las comunidades, su carácter de bien común y esencial



1. El departamento del Cauca la evidencia es sobresaliente, en 1995 fue el departamento en que mayor participación tuvo el minifundio en relación con la totalidad del área registrada, es decir, 221.465 predios menores de 5 hectáreas a los que corresponden un área de 655.587, representa el 94.9% de la totalidad de predios registrados en el mismo año y a los que responden un 23.5% de la superficie total.

para la vida. Será responsabilidad de la CRC y el Minambiente por acción u omisión el deterioro ambiental de nuestra Región. Cómo comprometerse en un Plan Departamental de Aguas si los municipios quedaran endeudados por más de 69.000 millones de pesos? Deuda que terminarán pagando las familias con impuestos y sobrecostos en las tarifas del agua y servicios públicos.

Niños, ancianos, mujeres y hombres aguantando cada vez mayor hambre; emergencias sociales y alimentarias declaradas por comunidades con solicitudes de interlocución sobre desarrollo alternativo no escuchadas por el indolente Gobierno; familias y comunidades campesinas mirando impotentes sus paisanos postrarse o morir, por ausencia de médicos, personal de salud, medicamentos, ... debido a la crisis de la salud. Menos escuelas y maestros, menos niños en las escuelas porque deben desplazarse a trabajar o a otros sitios para sobrevivir; jóvenes sin alternativas de educación superior ni técnica. Campesinos asesinados y que aparecen vestidos de camuflado y acusados de guerrilleros; poblaciones confinadas, militarización de la vida comunitaria, completan este panorama de violación de los ddhh en su integralidad.

Toda esta crisis social, porque el Estado y Gobierno nos condenan a la ilegitimidad, pobreza y exclusión; porque la imposición del modelo de desarrollo económico neoliberal y globalizante convierte en mercancías los derechos y tiene como centro la ganancia y no las personas y sus comunidades; porque se continua reduciendo lo que hay de Estado Social y Democrático en la Constitución del 91 con leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural que imposibilita el derecho a la tierra y la producción de alimentos; porque el Congreso de la República y el Presidente ponen

Niños, ancianos, mujeres y hombres aguantando cada vez mayor hambre; emergencias sociales y alimentarias declaradas por comunidades con solicitudes de interlocución sobre desarrollo alternativo no escuchadas por el indolente Gobierno

en riesgo la soberanía, producción propia y territorios geoestratégicos con sus recursos al servicio de multinacionales y del TLC; porque se impulsa la agudización del conflicto aumentando los muertos, amenazados, desplazados, las familias, comunidades y organizaciones desarticuladas; porque el Estado y Gobierno no honra ni cumple los Acuerdos pactados con comunidades y organizaciones sociales del Macizo y suroccidente desde 1.987, 1.991, 1.996 y 1.999.

Ante esta situación mujeres y hombres dignos organizados, resistimos y persistimos en la palabra propuesta y en la minga organizacional por vida digna, integración regional y social y el desarrollo propio. Nos convocamos y les convocamos e insistir ante el Gobierno en la vigencia y vivencia de los derechos humanos en su integralidad, en la defensa de los derechos de pueblos y comunidades, en consultas y cumbres que permitan la participación de to-

das y todos en las decisiones sobre el territorio, agua y biodiversidad, riqueza minera, en la evaluación de los gobiernos y las entidades públicas, en el cumplimiento de acuerdos pactados.

La Movilización social expresada en la reunión, el taller, el foro, la marcha, el paro, la feria agroambiental, el encuentro cultural, los intercambios, en suma, en la Asamblea Permanente, que deben recorrer nuestras familias y comunidades, nuestro territorio de la vereda a la Región en la construcción, consensos y decisiones para afrontar la pobreza, el olvido, la exclusión, la politiquería y la guerra, con sus leyes y políticas.

Tejamos la solidaridad de pequeños y medianos mineros con campesinos, maestros, estudiantes, negros, indios, madres cabeza de familia, madres comunitarias. En fin todas y todos en Marcha defendiendo nuestra vida digna, los territorios y propuestas de desarrollo propio!!■

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Asamblea General ONU



La Asamblea General

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta,

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas

como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,

Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,

Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1), así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena (2) afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,



Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,

Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera,

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,

Reconociendo también que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (3) y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
 - a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
 - b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
 - c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
 - d) Toda forma de asimilación o integración forzadas;
 - e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar

ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Artículo 11

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.



Artículo 12

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Artículo 13

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17

1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas.

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de la presente Declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.



Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido

Artículo 28

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

Artículo 29

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular

por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tie-

rras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Artículo 33

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.



Artículo 34

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Artículo 36

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos

Artículo 38

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

Artículo 39

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.

Artículo 43

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Artículo 44

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 45

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46

1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total

o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe■



263 mil y más caucanos levantamos la mano: entregue Japio Doctor Chaux

Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC



Como violatorio de los principios constitucionales consideró el parlamento indígena la locución dada por el gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, ante los medios de información regional el domingo 26 de los corrientes en el sentido que los desmovilizados de la Jacobo Arenas todos son indígenas.

Desde la consideración que una de las obligaciones de los funcionarios públicos es la de mantener su neutralidad, promover la defensa y garantía de los derechos humanos y no poner en riesgo a las comunidades, la frase “... Si yo soy el único colombiano que cree que hay guerrilleros indígenas todos los desmovilizados de la Jacobo Arenas son indígenas y

la gente que ha sido dada de baja en combate con camuflados, con AK 47 y con granadas de la Jacobo Arena son indígenas...”, expresada a los medios de comunicación al terminar un Consejo de Seguridad convocado por el presidente de la República, y realizado en Popayán el pasado domingo, coloca en alto riesgo la vida y la existencia de las comunidades indígenas del Cauca.

Resulta paradójico que un personaje que está siendo investigado por tener relaciones con grupos al margen de la ley haga señalamientos de forma tan irresponsable, pues el Gobernador, como la opinión pública saben que los pueblos indígenas no tenemos procesos judiciales que así lo indiquen.



Desde el momento que el Gobernador del Cauca presentó su Plan de Desarrollo denominado “Por el derecho a la diferencia” dio a entender que favorecía la concentración de la tierra en pocas manos, por lo cual se ha opuesto de forma constante al cumplimiento de los acuerdos que el Estado mantiene desde hace más de 25 años con los pueblos indígenas del departamento. Ya en el año 2005, cuando las comunidades iniciaron el proceso de Liberación de la Madre Tierra, el mismo funcionario había expresado que las fincas del Japio y la Emperatriz no se entregarían a indígenas por estar reclamadas por comunidades afros, ahora el argumento difiere substancialmente pues afirma “...Ustedes creen que se le puede entregar Japio a una comunidad

que está apoyada por la Jacobo Arenas donde hay una fábrica de ácido sulfúrico... Que levante la mano un Caucano que esté de acuerdo y yo seré el primero en decir que lo hagamos...”.

Con la frase anterior, el Gobernador del Cauca, pretende que la opinión pública relacione las acciones de Liberación de la Madre Tierra con la guerrilla, cuando, tanto él como la ciudadanía conocen de la independencia de los procesos indígenas, por ello, exigiendo respeto a la autonomía, 263 mil... y más caucanos levantamos la mano para exigir que entregue el Japio a las comunidades indígenas■

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC
Sesión del parlamento Indígena, noviembre 26 de 2007.



CRIC reclama al Gobierno detener la política de señalamientos y mentiras contra los procesos indígenas y sociales en el Cauca



Con mentiras, señalamientos y excesivo uso de la fuerza se expresa la política oficial del país, siendo el Cauca donde tiene su reflejo más eficiente, así lo demuestran las respuestas institucionales a las acciones de Liberación de La Madre Tierra en diferentes municipios y las declaraciones del gobernador del Cauca a través de diferentes medios de comunicación, en especial en la entrevista concedida al Periódico El Liberal de la ciudad de Popayán y publicada el domingo 9 de diciembre de 2007, en donde, con cifras amañadas dice haber cumplido compromisos e insiste

en señalar que la guerrilla está integrada por indígenas o que las movilizaciones se realizan para esconder problemas del narcotráfico.

Producto de esta política hoy en La María Piendamó, 11 de diciembre, 90 comuneros del pueblo Guambiano, que hacen presencia en la Finca La Macarena, fueron visitados a las 5 de la mañana del día 11 de los presentes, por más 300 Esmad y 50 efectivos de la policía nacional provenientes, al parecer, de la ciudad de Popayán, situación por la cual los comuneros abandonaron momentáneamente la finca reclamada, recordando que esta acción la están realizando para

denunciar que las instituciones han inventado trabas jurídicas inconstitucionales, como la del Plan de Ordenamiento Territorial emitido por el Consejo municipal de Piendamó en el año 2003, donde prohíbe la venta de tierras para comunidades indígenas, contrariando las aspiraciones y reclamaciones de la comunidad indígena Guambiana y a la voluntad de algunos propietarios de vender sus predios a esta comunidad.

Días anteriores, la comunidad había denunciado la detención irregular realizada por la fuerza pública, la cual se hacía acompañar de una persona cubierta con pasamontañas y que decía ser guerrillera. Según versiones, la policía ingresó a la propiedad colectiva del pueblo Guambiano, vestida de civil, y solo después de allanar una casa, interrogar a las personas que laboraban en una Minga, y se llevaron detenidos a dos jóvenes indígenas, se pusieron chalecos del B2. Los comuneros fueron dejados en libertad, pues no se encontró merito para su judicialización.

la policía ingreso a la propiedad colectiva del pueblo Guambiano, vestida de civil, y solo después de allanar una casa, interrogar a las personas que laboraban en una Minga, y se llevaron detenidos a dos jóvenes indígenas, se pusieron chalecos del B2

Por otra parte el día 7 de diciembre pasado, después de arremeter con violencia y haciendo uso de gases, armas de fuego y explosivos, contra la comunidad que se encuentra en la finca La Perla, situada en el municipio de Silvia, la fuerza pública, con maltratados físicos, y afectando la dignidad de las personas, retuvo a 5 guardias indígenas, en una acción policial que se desarrolló fuera del sitio donde la comunidad Nasa

de Tierradentro, desplazada por el volcán Nevado del Huila desde hace más de 6 meses, está haciendo presencia para reclamar del Estado protección de sus derechos. Los indígenas, que finalmente fueron dejados en libertad, habían sido sindicados de secuestro, lo cual fue desmentido en la audiencia judicial.

Un hecho, en apariencia aislado, fue denunciado por el guardia indígena del CRIC, quien observó la noche del domingo 9 de los presentes como un carro azul de vidrios polarizados y sin placas se parqueó a unos 30 metros de la sede indígena en Popayán.



Indicó que a eso de la una de la mañana un individuo con gafas oscuras y gorro se bajó del auto y se acercó en actitud sospechosa a la edificación por lo cual el guardia activo la alarma. El sujeto volvió al auto rápidamente y 15 minutos después prendió el auto y tranquilamente se alejó. Llama la atención que nadie acudió a la alerta de la sirena, siendo que tan sólo a 200 metros está establecida una estación de policía.

Para el Parlamento Indígena Popular, todos los hechos narrados son producto de las indicaciones que entregan los mandatarios en las ordenes que dan al personal encargado de la seguridad ciudadana, bien sea en sus discursos institucionales o en las declaraciones de los funcionarios ante los medios de comunicación, por lo tanto consideramos que el Estado colombiano tiene alta responsabilidad en las situaciones denunciadas; por lo cual reclamamos:

1. Del gobierno nacional y departamental acatamiento a sus obligaciones constitucionales, así como del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con nuestras autoridades tradicionales mediante convenios y contratos firmados desde hace más de 20 años.
2. De los organismos de control del Estado colombiano presten la vigilancia debida sobre los funcionarios públicos, reclamando que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos; actúen con neutralidad en todo tipo de situaciones, en especial frente a los conflictos por la tierra, y que viabilicen los compromisos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas del Cauca.
3. De la comunidad internacional que observe de forma permanente los procesos de Liberación de La Madre Tierra, demandando del

Gobierno colombiano evitar las discriminaciones y el racismo en sus actuaciones y expresiones públicas, igualmente para que cumpla de forma diligente y efectiva los compromisos adquiridos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1998, para la reparación integral del pueblo Nasa del norte del Cauca que sufrió la masacre del Nilo perpetrada por narcotraficantes con participación de agentes del Estado colombiano. Igualmente servir de facilitadores hacia el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado colombiano, entre ellos los establecidos en el decreto presidencial 982 y el acuerdo de diciembre de 2005.

4. De la opinión pública y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos instar al Estado colombiano para que detenga la política de señalamientos, detenciones y judicializaciones arbitrarias sobre comuneros y autoridades indígenas, exigiendo que atienda las críticas formuladas a las leyes ambientales y otras que recortan derechos fundamentales de los colombianos y para que agilice procedimientos que permitan brindar soluciones a la problemática social y de tierras que viven las comunidades rurales del país en especial los pueblos indígenas.
5. De la Defensoría del Pueblo y de los organismos de derechos humanos exigir que las instituciones de vigilancia e investigación respeten los procedimientos legales, usen distintivos que eviten generar desconfianza zozobra entre los pobladores, reclamando del Estado nacional se garanticen los derechos humanos y fundamentales de las autoridades y líderes, así como de las comunidades indígenas en general■

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC-
Parlamento Indígena Popular,
11 de Diciembre de 2007
Comunicado No.16.

Derecho Vital

Camilo González Posso



En Colombia se construyó un consenso de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y se consagró en la Constitución Política en 1991, en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la incorporación de convenios internacionales como parte del ordenamiento constitucional. Esos derechos de los pueblos originarios reconocen identidad, autonomía, cultura, territorio y planes de vida que han sido desconocidos por siglos y que han significado genocidios, extinción y exclusión. Muchos de esos derechos se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, a pesar de la abstención del

gobierno de Álvaro Uribe. ¿Cómo explicar que Colombia se margine de esta determinación de la mayoría de los Estados del planeta?

Desafortunadamente, la explicación está en un resurgimiento del racismo que ha venido promoviendo un discurso anti indígena y considera que las conquistas de autonomía y territorio son contrarias al progreso que en ese lenguaje se identifica con productividad y agroindustria exportadora. A los ojos de la diplomacia de la seguridad del Estado y el control de territorio, la firma de la Declaración significa ampliar los derechos de autonomía en cláusulas que obligarían aún más a consultar decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas.

La declaración se pronuncia por “la desmilitarización” de los territorios, contra el desplazamiento o la asimilación forzada, por la reparación por la deuda histórica y cuando se ejerza violencia y se produzca daño, por el control autónomo de la enseñanza. El artículo 26 de esa declaración habla del derecho a la tierra que las comunidades o pueblos indígenas han “poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”. El artículo 28 se refiere a la restitución o en su defecto reparación por pérdida de territorio. En el artículo 30 se establece que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos, indígenas”, salvo por grave amenaza y en todo caso con el consentimiento previo de la autoridad interna.

Nada de lo dicho es extraño a la normatividad vigente en Colombia, pero fortalece compromisos ante la comunidad internacional que resultan incómodos a una política anti indígena que ha venido ganando terreno con nuevas leyes y con políticas desquiciadas. Por ejemplo, se ha instituido la supremacía de los planes de ordenamiento territorial, contra la formación de resguardos o compra de tierras para comunidades indígenas; se ha declarado la supremacía de la gran empresa sobre las formas asociativas y los planes de vida y en consecuencia se le privilegia con políticas de crédito y subsidios; se burlan los derechos cada vez que

la explicación está en un resurgimiento del racismo que ha venido promoviendo un discurso anti indígena y considera que las conquistas de autonomía y territorio son contrarias al progreso que en ese lenguaje se identifica con productividad y agroindustria exportadora

lo dicta el imperativo de la seguridad y así se ordenan fumigaciones, control de movimientos y de compra de alimentos en los resguardos sin consulta ni aviso. Y para cerrar el círculo, si los indígenas reclaman, o piden que se cumplan pactos de territorio y autonomía, sale cualquier ministro o subalterno de cuarto rango, a declararlos terroristas o “aliados de la Jacobo Arenas de las FARC” y así se ponen a tono con las

leyes que han inventado últimamente que excluyen de cualquier beneficio o entrega de predios a comunidades cómplices con las vías de hecho. Cierran y tiran la llave y luego condenan y reprimen cuando no hay otra alternativa que la protesta y el ejercicio de la propia autoridad indígena.

Contra toda esa construcción provocadora que se basa en el desconocimiento de los derechos, comenzando por el derecho a la existencia, los pueblos indígenas del Cauca han instituido el Parlamento Indígena y han

comenzado a dictar sus normas. La primera ha sido el reconocimiento del derecho a la desobediencia civil frente a la arbitrariedad, la segunda ha sido la declaración de la supremacía del derecho al territorio vital contra leyes que se colocan por fuera de la Constitución y de los tratados internacionales y la tercera es un precedente de autonomía y soberanía que no logran entender los ministros con alma de mayordomos y ojos de encomenderos■

